

Señor  
**JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO** –reparto-  
Manizales

**Referencia:** *MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA*  
**Demandante:** *INVERSIONES FENI & CIA. S. en C. (NIT 810.002.432-6)*  
**Demandados:** *AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p. y  
el contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE*

**JOSE FENIBAR MARIN QUICENO**, mayor de edad y domiciliado en Manizales, identificado con la C.C. 10'264.105 de Manizales, abogado inscrito y en ejercicio, con T.P. de abogado 54085 del C.S. de la J., con el acostumbrado respeto me dirijo a Ustedes, en mi doble condición de abogado y representante legal de la sociedad **INVERSIONES FENI & CIA. S. en C. (NIT 810.002.432-6)** actual propietaria del inmueble ubicado en la carrera 18 N° 4-45, barrio La Francia, de Manizales, para en su representación iniciar, tramitar y culminar un **PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO** por acción de **REPARACION DIRECTA** (art. 140 nuevo CPACA), y perseguir judicialmente la responsabilidad administrativa, con la consecuente obligación jurídica de reparar patrimonialmente todos los perjuicios materiales y extrapatrimoniales *-ahora denominados “alteración grave de las condiciones de existencia”-* causados por la entidad **AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p. (NIT 810.000.598-0)**, *empresa de servicios públicos mixta, constituida por EP 521 del día 28.02.1996, otorgada en la Notaria Segunda de Manizales, inscrita en la Cámara de Comercio de Manizales bajo el registro N° 9-34333 del día 19.03.1996*, con domicilio principal en Manizales, representada legalmente por su gerente general **JUAN CARLOS PENAGOS LONDOÑO**, mayor de edad y domiciliado en Manizales, o por quien ejerza similares funciones, y contra el contratista **HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE**, mayor de edad y domiciliado en Manizales.

En consecuencia, comedidamente solicito personería judicial suficiente para actuar, y en uso de la misma expongo lo siguiente:

#### **DESIGNACION DE LAS PARTES PROCESALES:**

**Demandante:** Sociedad **INVERSIONES FENI & CIA. S. en C. (NIT 810.002.432-6)** actual propietaria del inmueble ubicado en la carrera 18 N° 4-45, barrio La Francia, de Manizales, representada legalmente por su gerente y socio gestor **JOSE FENIBAR MARIN QUICENO**, mayor de edad y domiciliado en Manizales, identificado con la C.C. 10'264.105 de Manizales, abogado inscrito y en ejercicio, con T.P. de abogado 54085 del C.S. de la J.

#### **Demandados:**

- a) **AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p. (NIT 810.000.598-0)**, *empresa de servicios públicos mixta, constituida por EP 521 del día 28.02.1996, otorgada en la Notaria Segunda de Manizales, inscrita en la Cámara de Comercio de Manizales bajo el*

registro N° 9-34333 del día 19.03.1996, con domicilio principal en Manizales, representada legalmente por su gerente general JUAN CARLOS PENAGOS LONDOÑO, mayor de edad y domiciliado en Manizales, o por quien ejerza similares funciones, y,

- b) El contratista **HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE** (C.C. 19'106.280), mayor de edad y domiciliado en Manizales.

Sirven de fundamento fáctico los siguientes **HECHOS**:

### **ACCIONES y OMISIONES:**

**PRIMERA:** En el trayecto de la carrera 18, con calle 4ª, barrio La Francia de Manizales, sobre los antejardines, y para el segundo semestre del año 2019, se realizaron obras de “*optimización y variación de la red de acueducto, fase II*”, que conllevaron perforaciones del terreno aledaño a los inmuebles.

**SEGUNDA:** En el antejardín de nuestra casa, situada en la carrera 18 N° 4-45, barrio La Francia de Manizales, y en espacio público, precisamente donde se hicieron las perforaciones por los funcionarios del contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, y/o de AGUAS DE MANIZALES, se encuentra un poste que sostiene el medidor (contador) de energía eléctrica, y hacia el piso un tubo de conducción de la red eléctrica al interior del inmueble mencionado y que resultó afectado.

**TERCERA:** Para mediados de noviembre del año 2019, el referido inmueble estuvo sin moradores por lapso de dos semanas, y cuando regresamos, no había energía eléctrica, y todos los víveres de la nevera putrefactos.

**CUARTA:** El servicio no había sido suspendido, sino que la red de conducción de energía, hacia el medidor al interior del inmueble, había sido cercenado, situación que no se conoció al principio, sino luego de un dictamen pericial.

**QUINTA:** Debió contratarse, en consecuencia, a un ingeniero eléctrico para que hiciera un diagnóstico o determinará la causa de la ausencia del servicio de energía eléctrica en el inmueble, quien luego de varios análisis encontró cercenado o roto, tanto el tubo de conducción, como los cables, en la base del poste externo que sostiene el medidor.

El resumen de tal concepto técnico fue el siguiente:

*“Que durante el mes de noviembre del año 2019, se descubrió una ruptura de los cables eléctricos que conducen la energía del medidor al interior del inmueble con nomenclatura urbana 4-45 de la carrera 18, barrio La Francia de Manizales.*

*Revisada la red eléctrica, se encontró que en la base del poste exterior que soporta dos medidores de energía eléctrica, había cercenamiento completo del tubo metálico de protección del cableado, como de los tres cables de acometida, unos centímetros abajo del nivel del piso, al parecer causado por elemento contundente y/o punzante (pala, pica, etc.)*

*Para la época de los hechos, se encontraban en el lugar haciendo excavaciones en el terreno donde sucedió el daño, varios trabajadores directos o indirectos de AGUAS DE MANIZALES, con el propósito de renovar las redes de acueducto. Ninguno de los*

*trabajadores dio explicación del responsable de la obra, ni del daño mismo”.*

**SEXTA:** Inmediatamente se hizo el reclamo a los trabajadores del lugar (*que hacían las obras de variación de redes de acueducto*), como ejecutores de las obras de “*optimización y variación de la red de acueducto, fase II*”, que incluso seguían perforando los pisos, y nunca dieron respuesta satisfactoria, ni indicaron quien era el ingeniero residente ni el responsable de la obra. Y tampoco hicieron nada para remediar la situación.

**SEPTIMA:** Ante tal atropello, acudimos a llamar a la profesional social del contratista, de nombre PAULA JANETH ZULUAGA, con quien se había firmado el acta de vecindad N° 10, informándole lo acontecido, y remediara la situación, y nunca se ha obtenido respuesta alguna seria ni favorable de su parte ni del contratista, menos de la prestadora del servicio público de acueducto y complementarios.

**OCTAVA:** Ante la premura de la situación, debimos contratar un ingeniero eléctrico para que reparara el daño, lo cual se hizo el día 21.11.2019, como lo constatan las fotografías tomadas *in situ*, y que se anexan.

**NOVENA:** Ante la anomalía de la situación descrita, que constituye una evidente responsabilidad extracontractual, o falla del servicio, por parte de AGUAS DE MANIZALES, y solidariamente del contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, hemos realizado diversas reclamaciones para que resarzan los perjuicios causados, incluso, informándolo a un funcionario de la interventoría, sin que hasta la fecha hayamos obtenido respuesta alguna, seria, ni favorable.

**DECIMA:** Unicamente, a principios del año 2020, sólo hubo una llamada de la señora PAULA JANETH ZULUAGA, a nombre del contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, quien ofreció una suma resarcitoria por valor de \$200.000,°, misma que fue rechazada de plano por pírrica e insuficiente frente a los daños directos y colaterales acaecidos.

**UNDECIMA:** Existe nexo de causalidad entre el siniestro –*ocurrido a mediados de noviembre del año 2019, entre los días 10 y 20-*, por la ruptura descuidada de los cables de conducción de energía al interior del inmueble ubicado en la carrera 18 N° 4-45 de Manizales, por cuenta exclusiva de los trabajadores del proyecto “*optimización y variación de red de acueducto La Francia-Fase II*”, y las secuelas o perjuicios sufridos por el ahora reclamante, y una evidente responsabilidad extracontractual endilgada solidariamente a la entidad AGUAS DE MANIZALES S.A., y al contratista de la obra señor HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, por ser la primera la titular de las redes de conducción de acueducto, administradora, operadora, y mantenedora, y/o explotadora económica de las tuberías conductoras de agua en el sitio del hecho, y, el segundo, porque, y especialmente, fue quien a través de sus dependientes o trabajadores causó los daños a la red eléctrica del inmueble situado en la carrera 18 N° 4-45 de Manizales.

**DUODECIMA:** La culpa exclusiva de los hechos referidos, generador de los perjuicios causados al reclamante, la tienen solidariamente AGUAS DE MANIZALES S.A., como dueña y beneficiaria de las obras emprendidas, y el CONTRATISTA señor HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, por la incuria, negligencia, impericia, y violación de los reglamentos de construcción, operación, mantenimiento o conservación de redes y tuberías, conductoras de agua, o en el manejo de la reposición de redes efectuadas en el barrio La Francia, o la impericia en el manejo de los movimientos de tierra por los trabajadores a su cargo, que cercenaron la red eléctrica interna del predio, desde su acometida externa.

**DECIMOTERCERA:** En consecuencia, los perjuicios causados por los responsables a la afectada reclamante, son los siguientes:

### **13.1. PERJUICIOS MATERIALES:**

13.1.1. Por DAÑO EMERGENTE (*lo que sale del patrimonio del perjudicado para atender las consecuencias o efectos del daño*), por reposición de cableado eléctrico y redes, como de víveres perdidos por el corte intempestivo de la energía eléctrica por casi dos semanas, todo lo cual se estima en \$2'000,000,°° (dos millones de pesos moneda colombiana).

13.1.2. Por LUCRO CESANTE (*lo que deja de ingresar al patrimonio económico del perjudicado como consecuencia del daño*), por los graves daños y perjuicios sufridos.

13.1.2.1. CONSOLIDADO se estima en \$7'500,000,°° (siete millones quinientos mil pesos moneda colombiana), desde la ocurrencia del hecho (noviembre del año 2019, o sea, 15 meses), y a razón de \$500.000,°° mensuales, hasta la presente fecha de presentación de la demanda; y,

13.1.2.2. FUTURO se estima en \$500.000,°° mensuales desde la presentación de la presente demanda y hasta la fecha en que se indemnicen total y satisfactoriamente los perjuicios causados.

**13.2. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** (*objetivados y subjetivados*): *Es el precio del dolor, que corresponde a la angustia o dolor íntimo que se siente cuando se afectan los sentimientos por la lesión o daño de que se es víctima, ahora denominados “alteración grave de las condiciones de existencia”, según tesis establecida por la jurisprudencia patria:*

*"(...) el daño extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados" "daño a la vida de relación", corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquella, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial -distinto del moral- es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre.*

*De otra parte, se precisa que una afectación de tal naturaleza puede surgir de diferentes hechos, y no exclusivamente como consecuencia de una lesión corporal. De otra manera, el concepto resultaría limitado y, por lo tanto, insuficiente, dado que ... únicamente permitiría considerar el perjuicio sufrido por la lesión a uno solo de los derechos de la personalidad, la integridad física. Así, aquella afectación puede tener causa en cualquier hecho con virtualidad para provocar una alteración a la vida de relación de las personas, como una acusación calumniosa o injuriosa, la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de éste por otra persona (situaciones a las que alude, expresamente, el artículo 4° del Decreto 1260 de 1970), o un sufrimiento muy intenso (daño moral), que, dada su gravedad, modifique el comportamiento social de quien lo padece, como podría suceder en aquellos casos en que la muerte de un ser querido afecta profundamente la vida familiar y social de una persona. Y no se descarta, por lo demás, la posibilidad de que el perjuicio a la vida de relación provenga de una afectación al patrimonio, como podría ocurrir en aquellos eventos en que la pérdida económica es tan grande que -al margen del perjuicio material que en sí misma implica- produce una alteración importante de las posibilidades vitales de las personas.*

*Debe decirse, además, que este perjuicio extrapatrimonial puede ser sufrido por la víctima directa del daño o por otras personas cercanas a ella, por razones de parentesco o amistad, entre otras.*

*En este sentido, son afortunadas las precisiones efectuadas por esta Sala en sentencia del 2 de octubre de 1997, donde se expresó, en relación con el concepto aludido, que no se trata de indemnizarla tristeza o el dolor experimentado por la víctima - daño moral -, y tampoco de resarcirlas consecuencias patrimoniales que para la víctima siguen por causa de la lesión - daño material -, "sino más bien de compensar, en procura de otorgar al damnificado una indemnización integral... la mengua de las posibilidades de realizar actividades que la víctima bien podría haber realizado o realizar, de no mediar la conducta dañina que se manifestó en su integridad corporal" (Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 11652. Mag. Pon. Daniel Suárez Hernández.)*

Como es al juzgador de instancia a quien le corresponde determinar el valor de los perjuicios extrapatrimoniales –antes morales y psicológicos-, estos deberán ser tasados en la sentencia respectiva, y por ahora, se estiman en la suma equivalente a veinte salarios mínimos vigentes.

Debe recordarse al juzgador que, de acuerdo a las secuelas del daño, y el peligro que representó el grave descuido de los accionados, como su silencio ante el mismo, y la elusión de sus responsabilidades, todo ello merece una tasación especial y ponderada de las indemnizaciones pretendidas, pues no debe olvidarse que,

*"Es al juez, pues, a quien corresponde en el caso regular el llamado precio del dolor. Y aunque es claro, por las mismas razones antes expuestas, que los jueces no están situados en mejor posición que los peritos para fijar ese monto, por lo cual su posición podría ser también, en cierto modo, arbitraria, es evidente que dada la altura de la misión que se les confía, que busca certeramente dispensar a cada uno su derecho, ius suum cuique tribue, augura y propicia que el pronunciamiento sobre ese punto sea clara realización de la justicia al lograr un humano equilibrio entre la equidad y el derecho como lo ha pregonado Gorphe". (sent. del día 27.09.1974, C.S. de J.).*

### **13.3. INDEXACION o CORRECCION MONETARIA:**

No obstante lo anterior, considero en mi modesto criterio jurídico, y con apoyo en la normatividad vigente que pregona equidad y justicia, con reparación integral de la víctima, que tales sumas de dinero deben ser actualizadas desde la fecha del siniestro, hasta el pago efectivo de las indemnizaciones.

La indexación se justifica por el envilecimiento de la moneda, fruto de la devaluación, pues su finalidad es permitirle al acreedor obtener la reparación integral, actualizando las cifras que debió obtener por las indemnizaciones pretendidas, para que el valor sea real al momento en que debe recibirlos.

**DECIMOCUARTA:** A pesar de los requerimientos repetidos a los responsables directos: AGUAS DE MANIZALES y CONTRATISTA, a través de sus dependientes, siguiendo el conducto regular, no se ha obtenido respuesta alguna, seria, ni satisfactoria.

**DECIMOQUINTA:** Incluso, y previamente, se hizo reclamación formal y directa, tendiente a AGOTAR VIA GUBERNATIVA para todos los efectos legales y jurídicos pertinentes, misma que tampoco fue atendida satisfactoriamente, habida cuenta que la operadora de servicios públicos de acueducto descargó la responsabilidad en el contratista, y este no asumió una posición seria de resarcimiento, como se demuestra con los documentos que se adjuntan.

**DECIMOSEXTA:** El art. 90 de la C.N. reza: "*El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas*", y por extensión, por todos los operadores de servicios públicos domiciliarios.

**DECIMOSEPTIMA:** Ante la anomalía de la situación descrita, que constituye una evidente responsabilidad extracontractual, o falla del servicio, de la infraestructura de acueducto y alcantarillado o su operador y mantenedor, que lo es AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p. y solidariamente el contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, como director de las obras emprendidas para su mejoramiento o reparación, tal circunstancia es sustento de la reparación directa que se pretende, significándose con ello, que ambos –prestador del servicio público domiciliario y contratista– son solidariamente responsables de los daños, perjuicios e indemnizaciones a que haya lugar.

**DECIMOCTAVA:** La entidad AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p., y el contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, a pesar de ser solidariamente responsables de los daños, NO han resarcido de manera alguna los perjuicios causados al predio afectado, a pesar de las pruebas aportadas, y sólo se limitaron a ofrecer una ínfima suma resarcitoria, que ni siquiera mitiga los perjuicios causados, menos los perjuicios colaterales ocasionados.

**DECIMONOVENA:** Según lo anterior, AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p., tiene bajo su responsabilidad la administración, explotación económica, operación, mantenimiento, manejo y cuidado de los ductos de conducción de agua potable y redes de alcantarillado, actividades con las cuales se produjo el hecho administrativo ya mencionado, pues no observaron el debido cuidado para evitar accidentes como el que se presentó, y que debió corregir y restablecer el dueño del predio afectado, lo que infiere el mal manejo en el movimiento de tierras, o la impericia de sus funcionarios para las instalaciones emprendidas de ductos o para corregir el daño.

**VIGESIMA:** Existe nexo de causalidad entre el siniestro *-presentado a mediados de noviembre, entre los días 10 y 20, del año 2019-*, y las secuelas o perjuicios sufridos por el actor en su propiedad urbana, explícitamente con el daño en la red eléctrica principal de acometida al interior del predio, cuya responsabilidad extracontractual endilgada solidariamente a la entidad AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p. y a su contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, es injustificable, por ser aquella la titular, propietaria, administradora, operadora, mantenedora, o explotadora económica de las redes de acueducto y alcantarillado local, y el segundo, por ser su dependiente y responsable directo de las obras emprendidas con las cuales se causó el daño.

**VIGESIMOPRIMERA:** La culpa exclusiva de los hechos referidos, generador de los perjuicios causados a la actora, la tienen solidariamente la entidad reclamada, y su contratista, por la incuria, negligencia, impericia, y violación de los reglamentos de construcción, operación, mantenimiento o conservación de redes y tuberías, de acueducto y alcantarillado, o en el manejo de los terrenos en que asientan o distribuyen, o la impericia en el manejo de los movimientos de tierra por sus funcionarios.

**VIGESIMOSEGUNDA:** De las pruebas relacionadas anteriormente *-documental que se aporta-* se infiere, razonablemente, que el hecho dañoso imputable a AGUAS DE MANIZALES S.A., como contratante y beneficiaria de las obras, y solidariamente al contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, es precisamente la perforación del terreno del antejardín, al edo al predio afectado, pues en el caso de estudio la abertura de una zanja pegada al tubo metálico de conducción de redes eléctricas, al igual que el

cercenamiento de las líneas de conducción de energía, sin los debidos cuidados ni precaución que les acarreaba, trajo como consecuencia los perjuicios denunciados.

**VIGESIMOTERCERA:** Los daños alegado por la accionante, ya referidos, tienen como causa directa una falla del servicio de la contratante y del contratista accionados, por lo que, en conclusión, se estima que existe la relación de causalidad entre el hecho y el daño, de una parte, y de los responsables directos –accionados-, de la otra.

**VIGESIMOCUARTA:** Previamente a esta acción se agotó la conciliación obligatoria, ante la Procuraduría Judicial Administrativa con sede en Manizales, como requisito de procedibilidad, y la misma resultó fallida, por falta de ánimo conciliatorio de los accionados, como se prueba con la respectiva acta que se adjunta.

### **P R E T E N S I O N E S:**

Que previos los trámites de rigor de un PROCESO ORDINARIO ADMINISTRATIVO, por acción o medio de control de REPARACION DIRECTA, con citación y audiencia de la entidad jurídica demandada y del contratista vinculado procesalmente, se profiera por ese Despacho Judicial sentencia definitiva, que haga tránsito a cosa juzgada, en la que se profieran estas o semejantes declaraciones:

#### **- PRIMERA PRETENSION:**

Declarar administrativa y extracontractualmente responsables a la entidad **AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p.** (NIT 810.000.598-0), *empresa de servicios públicos mixta, constituida por EP 521 del día 28.02.1996, otorgada en la Notaria Segunda de Manizales, inscrita en la Cámara de Comercio de Manizales bajo el registro N° 9-34333 del día 19.03.1996*, con domicilio principal en Manizales, representada legalmente por su gerente general JUAN CARLOS PENAGOS LONDOÑO, mayor de edad y domiciliado en Manizales, o por quien ejerza similares funciones, y solidariamente al contratista **HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE**, mayor de edad y domiciliado en Manizales, y a favor de la sociedad **INVERSIONES FENI & CIA. S. en C.** (NIT 810.002.432-6) en su calidad de propietaria del inmueble afectado, ubicado en la carrera 18 N° 4-45, barrio La Francia, de Manizales, representada legalmente por su gerente y socio gestor **JOSE FENIBAR MARIN QUICENO**, mayor de edad y domiciliado en Manizales, identificado con la C.C. 10'264.105 de Manizales, abogado inscrito y en ejercicio, con T.P. de abogado 54085 del C.S. de la J., o quien ejerza similares funciones.

#### **- SEGUNDA PRETENSION:**

Condenar a la entidad **AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p.** (NIT 810.000.598-0), *empresa de servicios públicos mixta, constituida por EP 521 del día 28.02.1996, otorgada en la Notaria Segunda de Manizales, inscrita en la Cámara de Comercio de Manizales bajo el registro N° 9-34333 del día 19.03.1996*, con domicilio principal en Manizales, representada legalmente por su gerente general JUAN CARLOS PENAGOS LONDOÑO, mayor de edad y domiciliado en Manizales, o por quien ejerza similares funciones, y solidariamente al contratista **HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE**, mayor de edad y domiciliado en Manizales, y a favor de la sociedad **INVERSIONES FENI & CIA. S. en C.** (NIT 810.002.432-6) en su calidad de propietaria del inmueble afectado, ubicado en la carrera 18 N° 4-45, barrio La Francia, de Manizales; a pagar las siguientes o semejantes sumas de dinero, como indemnización, por los perjuicios irrogados:

## **2.1. PERJUICIOS MATERIALES:**

2.1.1. Por DAÑO EMERGENTE, por la suma de \$2'000,000,°° (dos millones de pesos moneda colombiana), o la que se demostrare dentro del proceso.

2.1.2. Por LUCRO CESANTE CONSOLIDADO, por la suma de \$7'500,000,°° (siete millones quinientos mil pesos moneda colombiana), a la que se demostrare dentro del proceso.

2.1.3. Por LUCRO CESANTE FUTURO, por la suma de \$500.000,°° mensuales desde la presentación de esta demanda, hasta la fecha en que se indemnicen total y satisfactoriamente los perjuicios causados, o la que se demostrare dentro del proceso.

**2.2. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** (*objetivados y subjetivados*): Por la suma equivalente a veinte salarios mínimos vigentes, o la que se demostrare dentro del proceso.

2.3. Por la INDEXACION o CORRECCION MONETARIA, de los perjuicios materiales y morales causados, para que se actualicen las condenas desde la fecha del hecho (noviembre del año 2019), hasta el pago efectivo de las indemnizaciones.

## **- TERCERA PRETENSION:**

Ordenar a ambos accionados, a dar cumplimiento a la sentencia dentro del término estipulado en la normatividad del nuevo CPACA.

**-CUARTA PRETENSION:** Condenar a los accionados al pago solidario de las costas a que hubiere lugar, y que se causen por el presente proceso.

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES:**

Invoco como normas de derecho las siguientes:

- 1- Constitución Política: preámbulo, arts. 1, 2, 4, 6, 13, 15, 21, 24, 28, 29, 83, 85, 89, 90, 91, 92, 228, 229 y 250.
- 2- Código Contencioso Administrativo: Ley 1437 del 2011.
- 3- Ley 153 de 1887: arts. 4º, 5º y 8º.
- 4- Ley 142 de 1994, y demás normas concordantes.
- 5- Invoco la doctrina y jurisprudencia aplicables, debidamente mencionadas en el presente libelo de demanda, análogas y concordantes para casos semejantes.

## **CONCEPTOS FACTICOS y JURIDICOS DE LA VIOLACIÓN:**

Se ha entendido por servicio público, desde antaño "*... toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas*" (art. 1º, Dto. 753 de 1956)



*“Son los servicios públicos domiciliarios, entendidos como una especie del género servicio público, que pretende satisfacer las necesidades más básicas de los asociados, ocupando un alto nivel de importancia dentro de las tareas y objetivos que componen la gestión estatal, al punto de convertirse en una de sus razones fundamentales. Indudablemente, una ineficiente prestación de los servicios públicos puede acarrear perjuicio para derechos de alta significación como la vida, la integridad personal, la salud, etc.” (Sent. C-066 de 1997, Corte Constitucional)*

Se ha entendido por servicio público, desde antaño "... toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas" (art. 1º, Dto. 753 de 1956)

De ahí, que la prestación de los servicios públicos sea una actividad cuyo ejercicio constante se reclama, en beneficio de toda la comunidad, con la consecuente obligación para el Estado, de que su suministro sea permanente, y, ante todo, seguro.

En ciertas ocasiones, como sucede con el servicio de acueducto y alcantarillado, el Estado se ve en la necesidad de ubicar instalaciones físicas de redes, en lugares habitados, por exigencias de orden técnico, o para hacer llegar el servicio hasta donde se halla ubicada la población, pero allí es donde cobra mayor importancia el criterio de seguridad en la instalación de las redes y ductos.

En estos eventos, aparece la mayor responsabilidad para el prestador del servicio público: observar un especial cuidado y vigilancia en el mantenimiento de las redes e instalaciones, para salvaguardar los derechos de las personas que habitan cerca de estos lugares, y de contera, observar las reglamentaciones técnicas que existan al respecto.

Así pues, la construcción e instalación de redes y ductos dentro de los perímetros poblados es perfectamente viable, previa atención de las disposiciones técnicas, en cuanto a su ubicación y funcionamiento, y de no ser así, ello conlleva una presunción de culpa, por negligencia, impericia o descuido, de los operadores del sistema o prestadores del servicio.

No quiere esto decir que en la prestación de este servicio, no exista algún tipo de riesgo; lo que sucede es que, en cumplimiento de las normas de seguridad, estas situaciones se pueden ver aminoradas, incluso convirtiéndose en previsibles o evitables en la mayoría de los casos, pues cuando se desconocen los reglamentos técnicos para su mantenimiento o instalación, como acontece en el asunto de marras, que al perforar el terreno cercenaron los ductos eléctricos colaterales, tal violación reglamentaria se toma como fuente de la responsabilidad reclamada.

En primer lugar, el art. 140 del nuevo CPACA, legitima a mi mandante para invocar esta acción de REPARACIÓN DIRECTA por hechos del prestador del servicio público de acueducto, en que se hallaban ubicadas las redes y obras causantes del daño cuya reparación se pretende.

La acción de reparación directa y cumplimiento, como su denominación lo da a entender, procura el resultado inmediato de la pretensión, sin que medie definición alguna respecto de una decisión administrativa; la pretensión se basa en la ocurrencia de un daño o perjuicio para una persona en particular; pero el origen no es un acto administrativo, sino un hecho de la administración, que produce daño en los bienes del actor.

La acción se funda en que todo acto o hecho que causa un daño origina responsabilidad no sólo para la Nación y las entidades territoriales o descentralizadas, y de las personas privadas que cumplen funciones públicas, o presten servicios públicos domiciliarios, sino también en relación con los funcionarios, por culpa grave o dolo en el ejercicio de sus funciones.

En síntesis, es el ejercicio de una acción en que se pretende la indemnización de perjuicios causados por hechos, omisiones u operaciones del ente responsable, y el *petitum* se limita a pedir directamente la indemnización del perjuicio causado, que consiste en la reparación del daño por un deber legal que la administración por extensión, como aquí acontece, ha eludido.

Por ello, la falla del servicio, como fuente de responsabilidad del Estado representa la apertura de una garantía más dentro del sistema jurídico para los ciudadanos, de manera que la responsabilidad por el error, o la falla misma del servicio, únicamente tenga lugar ante situaciones realmente excepcionales, como se estilaba.

En efecto, cuando se hace referencia a la responsabilidad por falla, probada la misma, implica demostrar que la administración actuó de manera contraria a la regularidad administrativa, o que lo hizo de manera ilegal, o contrariando los postulados de buen servicio público o adecuada función administrativa; lo que significa, que en el actuar de la administración se evidencia que actuó mal, tardíamente, o no actuó; lo que a su vez implica, la posibilidad de extender los eventos de falla del servicio, por cuanto en la irregularidad es posible involucrar toda actuación de las personas jurídicas públicas, que se alejen del buen servicio, siempre que se identifiquen parámetros mínimos de correcta actividad administrativa.

Aquí se trata de una relación que ocurre entre el Estado (*prestador del servicio público domiciliario*), y de la otra parte, un particular afectado por la falla de los mecanismos de seguridad y prevención en la instalación o reposición de las redes y ductos de agua, que finalmente, por un descuido en la perforación del terreno, dieron como resultado una ruptura de las redes eléctricas, constitutivo del daño cuya acción pretende su resarcimiento a favor del actor afectado.

Por ello enfatizamos que la conducta omisiva y negligente, desplegada por los actores del conflicto, riñe en forma ostensible con los preceptos legales y constitucionales, porque la omisión por no guardar las precauciones y curia en la perforación o movimiento de tierras, encaja perfectamente en los lineamientos del error técnico inexcusable que predicamos, como fuente de responsabilidad.

Como las demás funciones del Estado, la de prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, está sujeta al imperio de lo jurídico, y sólo puede ser ejercida dentro de los términos establecidos con antelación por normas generales y abstractas que vinculan positiva y negativamente a sus servidores, sean públicos o privados.

De ahí que el art. 140 del CPACA, plasma la acción de reparación directa como un mecanismo idóneo para perseguir y obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual, a cargo del Estado, como consecuencia de daños inferidos a causa de hechos, omisiones, operaciones administrativas o similares de cualquier causa, por los daños jurídicos imputables a las acciones u omisiones de sus agentes (*prestadores de servicios públicos*).

**“Art. 140. Reparación directa.** En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

*De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.* (La expresión subrayada fue declarada exequible por el cargo examinado, mediante Sent. de la Corte Constitucional C-644 de 2011)

*Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.*

*En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.*

La responsabilidad del Estado, o de los operadores de los servicios públicos domiciliarios, es la obligación que nace para ellos de reparar o indemnizar los perjuicios causados a los ciudadanos o a la sociedad cuando quiera que incumplen total o parcialmente, o cumplen defectuosamente, con los deberes fundamentales que han sido consagrados en la Constitución y las leyes.

De todas maneras, en la falla probada del servicio, es necesario demostrar la irregularidad en el actuar público, es decir, la culpabilidad de la administración, lo que significa, que además de acreditar la actuación, el daño y el nexo causal, es preciso evidenciar un Estado alejado de criterios de buen servicio público y por el contrario, se presenta como vulnerador de derechos-

Así por ejemplo, la falla en el servicio por una actuación irregular de la administración, se encuentra en los actos ilegales de una autoridad pública, que son controvertidos a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y que de ser anulados, lo que dejan ver, es una entidad alejada de la obligatoriedad de cumplir con el ordenamiento jurídico, como aquí acontece (mírese la jurisprudencia dominante del C.E., Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección III, exp. 14.170, sent. del 25.02.2005, M.P. Ramiro Saavedra Becerra, que al referirse a las modalidades de la falla del servicio dijo: “No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico (se refiere al artículo 90 constitucional que consagra la responsabilidad del Estado por daño antijurídico) como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de responsabilidad de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia, entre ellos el de la tradicional **falla del servicio, dentro de la cual la responsabilidad surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos fundamentales: el daño antijurídico sufrido por el interesado, el deficiente funcionamiento del servicio, porque no funcionó cuando ha debido hacerlo, o lo hizo de manera tardía o equivocada, y finalmente, una relación de causalidad entre este último y el primero, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio**” (resaltados fuera del texto)).

Esta obligación constituye, sin lugar a dudas, el fundamento o razón de ser de la mayoría de las actividades que realiza el Estado; justifica su existencia, así como la de las autoridades que lo conforman, y de los poderes y medios de que dispone, y también explica la obediencia y respeto que las autoridades, y los operadores de servicios públicos domiciliarios, deben a todos los asociados.

Lógicamente, sólo podrá deducirse la responsabilidad que reclamamos, en los casos que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones, actuaciones negligentes o con cualquier elemento generador de culpa -impericia, negligencia, falta de cuidado, incuria, o la violación de reglamentos-, todo lo cual es objeto de censura, por haber sido el causante del siniestro que se analiza.

La responsabilidad estatal resulta de la carga especial que se le impone a una persona por desvío, abuso o inacción del Estado. La reparación es una cuestión de justicia distributiva, o equidad, y ésta, a su vez, es un principio de derecho natural, de aquellos que inspiran la propia constitución.

Para que exista responsabilidad estatal, entendiendo la prestación del servicio público domiciliario de acueducto dentro de esta concepción, se requiere:

- a) *La responsabilidad del Estado, directa y objetiva, que surja de una acción u omisión, de un ente gubernamental, o de un prestador de servicios públicos.*
- b) *Dicha acción u omisión debe ser imputable a una autoridad pública, o a un operador de servicios públicos.*
- c) *Tal acción u omisión, debe ser causa de un daño antijurídico a una persona natural o jurídica.*

Sobre el daño antijurídico, ha expresado el Consejo de Estado:

*"... un daño será antijurídico cuando la víctima no esté obligada por imperativo explícito del ordenamiento a soportar la lesión de un interés patrimonial garantizado por la norma jurídica".*

*"Y el daño tiene que ser antijurídico, o sea causado por el comportamiento irregular de la administración (irregularidad o falla que se puede dar por acción u omisión) o por una conducta que aunque regular, sea lesiva del principio constitucional de la igualdad frente a las cargas públicas, derivación del principio general de la igualdad ante la ley".*

*"En otros términos, el daño es antijurídico no solo cuando la administración que lo causa actúa irregularmente, sino cuando esa conducta lesiva esté ajustada al ordenamiento".*

*"Pero decir daño antijurídico no quiere significar que la noción de tara o falla del servicio desapareció de la responsabilidad estatal y menos que el acreedor de la indemnización ya no tenga que probar la falta si la hubo o la conducta irregular que lo lesionó".*

*"En otras palabras, cuando se alega que la conducta irregular de la administración produjo el daño (la falla del servicio en el lenguaje corriente) tendrá que probarse esa irregularidad, salvedad de los eventos en que esa falla se presume. En ambas hipótesis ese primer supuesto de la responsabilidad deberá gobernarse por las reglas de la carga probatoria. Y cuando se afirma que ese daño se produjo sin falta o falla de la administración, pero que el que lo sufre no tenía por qué soportado, el acreedor como es apenas evidente, deberá demostrar el daño y el por qué, pese a ser legal la actuación de la administración, no tenía por qué sufrirlo." (Sent. del 25.02.1993)*

Por ello, doctrinariamente, se ha dicho que la acción de reparación directa, debe contener estas características:

- a. *Que con ella se pretenda una condena en contra de la administración, o de un operador de servicio público domiciliario, de carácter extracontractual, es decir que busque la indemnización de perjuicios y el restablecimiento del correspondiente derecho.*

*b. Que su titular haya sufrido perjuicio con el hecho, la omisión, etc., o por cualquier otra causa extracontractual de la administración, o del operador de servicios públicos domiciliarios.*

*c. Que el sujeto pasivo sea la administración pública, o un operador de servicio público domiciliario, en la medida que la actuación haya sido desplegada por personas o entidades que ejercen funciones administrativas o judiciales.*

*d. Que no hayan transcurrido más de dos años, contados a partir del día siguiente de sucedidos los hechos que la originan.*

Todos estos requisitos se cumplen a cabalidad con la presente acción.

Respecto a la acción, para abundar en la teoría general de la responsabilidad, se recurre en el presente evento al ejercicio de la responsabilidad civil extracontractual derivada de la ejecución de una conducta dañosa y consecuentemente se condene a la reparación de los perjuicios irrogados con el hecho causante del daño (art. 2341 del C.C.). o, responsabilidad aquiliana, la cual se ha definido como la obligación: *“que surge por razón de un hecho ilícito que ha causado perjuicios a una persona no ligada al ofensor por ningún vínculo nacido de contrato, para distinguirla y separarla de la responsabilidad contractual”* (CARLOS A. OLANO VALDERRAMA, “Tratado Técnico Jurídico sobre accidentes de circulación y materias afines”. Ed. Librería ediciones del profesional Ltda. 2003. Pág. 83).

La C.S. de J. partiendo del concepto dual de responsabilidad establece (Sala de Casación Civil, sent. SC2107-2018 del 21.02.2018, proceso 11001-31-03-032-2011-00736-01, M.P. Dr. Luis Armando Tolosa Villabona): *“... En tanto que la responsabilidad civil extracontractual, también denominada delictual o aquiliana, es aquella que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino en un “hecho jurídico”, ya se trate de un delito o de un ilícito de carácter civil.”*

Para la configuración de esta acción, de manera inveterada la doctrina y la jurisprudencia ha determinado precisos requisitos como son: la ocurrencia de una culpa, de un daño y de la relación de causalidad entre los dos. Así lo establece la jurisprudencia especializada (*idem*):

*“Esta Corte, con apoyo en el artículo 2341 del Código Civil, ha señalado como presupuestos axiológicos y concurrentes de la responsabilidad extracontractual, denominada también aquiliana, “(i) el perjuicio padecido; (ii) el hecho intencional o culposo atribuible al demandado; y (iii) la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre factores”.*

En cuanto a la culpa y la relación de causalidad entre el daño y la culpa, ya se encuentran claros en virtud de la existencia del daño, documentado con prueba documental (*fotografías y dictamen pericial*), y respecto al daño irrogado establecemos que siendo la falla del servicio una de las causas de las obligaciones, la principal prerrogativa para los afectados con sus consecuencias, es la de recibir indemnización, así se consagra en el art. 2341 del C.C. y el art. 140 del CPACA.

Nuestro centenario Código Civil, en el inc. 2° del art. 1568 define las obligaciones solidarias como aquellas a cargo de dos o más personas o en favor de una pluralidad de personas imponen la posibilidad de cada acreedor exigir la totalidad del crédito o a cada deudor el pago total de la deuda, aun existiendo divisibilidad del objeto. La norma exige que estos eventos sean expresamente pactados por las partes o consagrados en la ley.

Por el contrato estatal de obra de “*optimización y variación de la red de acueducto, fase II*”, en el barrio La Francia de Manizales, ordenado por AGUAS DE MANIZALES, bajo la coordinación del contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, como director y ejecutor de las mismas, tal circunstancia es sustento de la reparación directa que se pretende, significándose con ello, que ambos —*prestador del servicio público domiciliario o beneficiario de las obras, y el contratista, respectivamente*— son solidariamente responsables de los daños, perjuicios e indemnizaciones a que haya lugar.

Ello significa, que en virtud de dicha contratación, tanto AGUAS DE MANIZALES S.A., como el contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, simple y llanamente, estaban asumiendo la prestación de un servicio público, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado.

Dada la creciente complejidad del Estado, de tiempo atrás, tanto la normatividad constitucional (*verbi gracia, los arts. 121, 123 y 210 de la C.P.*), como legal, han permitido que la función pública, no solo sea ejercida por los servidores públicos sino también por particulares, valga como ejemplo: notarios, curadores urbanos, las cámaras de comercio, secuestres, peritos, jurados de votación, jueces de paz y de la jurisdicción indígena, árbitros y conciliadores, agentes retenedores y recaudadores, interventores, y prestadores de servicios públicos (*arts. 78, 365 al 370 de la C.N.*), etc., últimos para el caso que nos ocupa.

Para nuestro estudio, nos centramos en los contratistas.

Aparte de la responsabilidad fiscal, penal, disciplinaria de las personas que han contratado con el Estado, la que nos interesa en este evento, es la responsabilidad civil, tal como consagra el Art. 52 de la ley 80 de 1993. En estos eventos, ha dicho la doctrina y la jurisprudencia que el contratista estatal se asimila a un empleado público. Al respecto La jurisprudencia del órgano de cierre estableció (Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, sent. del 24.08.2010, rad. 31.986, M.P. María del Rosario González de Lemos):

*“... En otras palabras, en este evento, se repite, el contratista se constituye en un colaborador de la entidad estatal con la que celebra el contrato administrativo para la realización de actividades que propenden por la utilidad pública, pero no en calidad de delegatario o depositario de sus funciones...”*

*“Ello tiene su razón de ser jurídica, en la medida en que la función pública radica en cabeza del Estado. Sin embargo, como la Constitución y la ley prevén que es posible delegar dicha función, lógico es concluir que el particular, adquirente de la función pública, se convierta en servidor público”.*

*“En síntesis, cuando el particular, con motivo de la contratación pública, asume funciones públicas propias del Estado, se encuentra cobijado con la investidura de servidor público.”.*

Resulta claro entonces que quien contrata con el Estado, o presta un servicio público domiciliario, responderá por las acciones u omisiones ilegales o irregulares en que incurra, como lo ha determinado la doctrina constitucional (Corte Constitucional, sent. C-563 del 07.10.1998, Mgs. Antonio Barrera Carbonell y Carlos Gaviria Díaz):

*“Realmente no encuentra la Sala que la norma del art. 53, en materia de responsabilidad de los diferentes tipos de contratistas agregue algo nuevo a la noción general de responsabilidad que para todo contratista se deriva del art. 52 de la ley 80/93, porque examinada aquélla se observa que la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores, se deduce, como es apenas lógico y normal del cumplimiento o no de sus obligaciones contractuales y de las acciones y omisiones antijurídicas en que estos puedan haber incurrido en la celebración y ejecución de los correspondientes contratos.”*

Por lo tanto, asimilados los contratistas estatales con empleados públicos, ellos serán sujetos al mismo régimen de responsabilidad de estos últimos, tal como lo establece el art. 90 de la C.P., y la ley 678 de 2001. Entonces, en virtud de la prestación de un servicio

público domiciliario, como de la contratación estatal, tanto AGUAS DE MANIZALES, como el contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, respectivamente, en las calidades ya insertas, es factible aplicarles solidariamente la basta jurisprudencia del Consejo de Estado, por responsabilidad extracontractual derivada de las fallas del servicio, sometida a un tipo de responsabilidad de daño especial u objetivo, por la naturaleza del servicio público que prestan y por el tipo de usuarios que atienden, cuyos derechos son prevalentes, por lo tanto, en la comisión de sus fallas no se exoneran demostrando diligencia y cuidado, pues asumieron la condición de servidores públicos, y bajo esa naturaleza, deben responder solidariamente conforme al art. 90 de la C.P., que para el caso, como ha dicho el Consejo de Estado, quedaron bajo el régimen de daño especial, y en esas condiciones debe responder solidariamente por los perjuicios irrogados a quien no tenía el deber legal de soportarlos.

Ahora bien, la responsabilidad del Estado en la actualidad se define desde el concepto del daño antijurídico, es decir, aquel cuya víctima no tiene la obligación de soportar, siendo indiferente en muchos casos si es consecuencia de una actuación irregular o regular de la persona pública y así lo ha entendido la Corte Constitucional desde el año 1996, quien a la luz de los actuales postulados constitucionales, en especial el artículo 90 de la Carta Política, ha definido la responsabilidad del Estado como: *“(…) un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”* (Sent. C-333 del 01.08.1996. Mag. Pon.: ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO, Exp. D-1111, Corte Constitucional)

La postura reiterada del Consejo de Estado, desde el año 1992 hasta la actualidad, resume la responsabilidad estatal en las siguientes breves palabras: *“... La teoría de la falla presunta entonces consistía en una inversión de la prueba de la falla médica, en el sentido de que era el demandado quien debía probar que aquella no existió, lo cual era contrario al postulado contenido en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil. Lo que sí es cierto es que el primer interesado en demostrar que su conducta fue negligente o cuidadosa debe ser la administración, pues un servicio debe prestarse en la forma prescrita por las leyes o los reglamentos y si ocurre que no se prestó o se prestó inoportunamente, la primera inferencia lógica del juzgador será que el funcionamiento anormal se debió, en principio, a culpa de la administración, es decir a negligencia o descuido de esta. (...) Esta, entonces, tendrá la carga (entendida en el anotado sentido de interés) de demostrar que su conducta se ajustó a su obligación genérica de proteger a los administrados en su vida, honra y bienes (art. 16 de la Carta) y a la específica que le señalen los reglamentos....”* (Mírense la siguientes providencias: Sent. del 30.07.1992, ponente DANIEL SUÁREZ HERNÁNDEZ, rad 6987; Sent. del 13.08.1992, pon. Rad. 7274; Sent. del 13.08.1992, pon. CARLOS BETANCOUR JARAMILLO, rad. 6754; Sent. del 11.12.1992, pon. JULIO CÉSAR URIBE ACOSTA, rad. 7416; Sent. del 30.07.1993, pon. DANIEL SUÁREZ HERNÁNDEZ, rad. 8025; Sent. del 12.10.1993, pon. CARLOS BETANCOUR JARAMILLO, exp. 8148; Sent. del 05.08.1994, pon. DANIEL SUÁREZ HERNÁNDEZ, exp. 9880; Sent. del 03.02.1995, pon. CARLOS BETANCOUR JARAMILLO, exp. 9142; Sent. del 08.05.1997, pon. CARLOS BETANCOUR JARAMILLO, exp. 11220; Sent. del 04.09.1997, pon. RICARDO HOYOS DUQUE, exp. 10251; Sent. del 10.02.2000, pon. ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, exp. 11878; Sent. del 15.06.2000, pon. MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ, exp. 12548; Sent. del 03.05.2001, pon. ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, exp. 12338; Sent. del 31.08.2006, pon. RUTH STELLA CORREA PALACIO, exp. 15772; y, Sent. del 15.02.2012, pon. STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO, exp. 21636; todas Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, CONSEJO DE ESTADO, entre otras).

### **ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA:**

La estimamos en la suma de \$9'500,000,00 moneda colombiana, que es aproximadamente el valor actualizado de las pretensiones (daño patrimonial), en razón a que la actora sufrió múltiples perjuicios para recuperar los daños causados y sufridos, a razón del DAÑO EMERGENTE, por reposición de cableado eléctrico y redes, como de víveres perdidos por el corte intempestivo de la energía eléctrica por casi dos semanas, todo lo cual se estima en \$2'000,000,00 (dos millones de pesos moneda colombiana), más el LUCRO CESANTE CONSOLIDADO que se estima en \$7'500,000,00 (siete millones quinientos mil pesos moneda colombiana), desde la ocurrencia del daño hasta la presente fecha, a razón de

\$500.000,°° mensuales; sin que se tengan en la cuenta el LUCRO CESANTE FUTURO, por su incertidumbre en el tiempo (a razón de \$500.000,°° mensuales), hasta la fecha en que se indemnicen total y satisfactoriamente los perjuicios causados, ni los PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (*objetivados y subjetivados, o “precio del dolor”, que corresponde a la angustia o dolor íntimo que se siente cuando se afectan los sentimientos por la lesión o daño de que se es víctima*, ahora denominados “*alteración grave de las condiciones de existencia*”, según tesis establecida por la jurisprudencia patria, ya que, como es al juzgador de instancia a quien le corresponde determinar el valor de los mismos –*antes morales y psicológicos*-, estos deberán ser tasados en la sentencia respectiva, y por ahora, se estiman en la suma equivalente a veinte salarios mínimos vigentes, pero tampoco se tienen en la cuenta para el juramento estimatorio.

Debe recordarse al juzgador que, de acuerdo a las secuelas del daño, y el peligro que representó el grave descuido de los accionados, como su silencio ante el mismo, y la elusión de sus responsabilidades, que constituyen una evidente mala fe, todo ello merece una tasación especial y ponderada de las indemnizaciones pretendidas, pues no debe olvidarse que, la víctima merece una reparación integral de los perjuicios sufridos y que no tenía el deber legal de soportarlos.

En consecuencia, la cuantía a la fecha de la presentación de la demanda, se estima en la suma de \$9'500,000,°° (daño emergente y lucro cesante consolidado), como interés económico en disputa, o pretensiones económicas del actor; sin tener en la cuenta el lucro cesante futuro, ni las indexaciones o correcciones monetarias a que haya lugar.

### **MEDIOS de PRUEBA:**

Para que sean apreciados como tales, comedidamente solicito decretar, practicar y tener como tales los siguientes:

**1. INTERROGATORIO DE PARTE:** Sírvase hacer comparecer al codemandado HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, como persona natural, mayor de edad y domiciliado en Manizales, para que absuelva el interrogatorio que haré sobre los hechos de la presente demanda y especialmente sobre los daños ocasionados a las redes eléctricas de la residencia situada en la carrera 18 N° 4-45, con ocasión de la perforación de terrenos en el antejardín para desarrollar el proyecto “optimización y variación de la red de acueducto, fase II”, para AGUAS DE MANIZALES, en el barrio la Francia de Manizales.

**2. DOCUMENTALES:** Adjunto los siguientes documentos:

- 2.1. Certificado de existencia y representación legal de la entidad afectada-accionante.
- 2.2. Certificado de existencia y representación legal de la entidad accionada.
- 2.3. Copia del derecho de petición a la entidad AGUAS DE MANIZALES.
- 2.4. Respuesta de AGUAS DE MANIZALES S.A. y del CONTRATISTA, constitutiva de agotamiento de vía gubernativa.
- 2.5. Copias de placas fotográficas tomadas al sitio del daño y reparación de daños.
- 2.6. Copia del acta de vecindad, para emprender obras.
- 2.7. Certificado de reparación de daños directos (red eléctrica).
- 2.8. Copia de la solicitud de conciliación.
- 2.9. Copias del desarrollo de la conciliación extrajudicial, de la admisión y actas respectivas, como de la certificación de fallido acuerdo.

**3. TESTIMONIAL:**



Cítese a las siguientes personas, todas mayores de edad y domiciliadas en Manizales, para que bajo la gravedad de juramento declaren sobre los hechos de esta demanda, y especialmente sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se afectó el predio de la actora, por el cercenamiento de las redes eléctricas, derivado de las obras de los accionados en el sector con la perforación de terreno de antejardín, y ocurrencia de perjuicios colaterales, y el monto de todos los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales ocasionados por el mismo hecho al actor, etc., y en general para todo lo que sea necesario o indispensable en el esclarecimiento de los hechos.

Ellos son:

- JUAN JOSE MARIN SANCHEZ.
- GONZALO LONDOÑO RAMIREZ.
- SARA MARIN SANCHEZ.
- GLORIA STELLA SANCHEZ QUINTERO.
- JENNIFER RAMIREZ LOPEZ.
- PAULA JANETH ZULUAGA.

Todos son mayores de edad, están domiciliados en Manizales, y se localizan en la carrera 23 N° 25-32, Edificio Esponsión, los cinco primeros, y la última en la carrera 22 N° 48 C 15 de Manizales.

#### **4. PRUEBA PERICIAL:**

Sírvase decretar la práctica de prueba pericial, designando perito idóneo, adscrito a la lista de auxiliares de la justicia, a fin de que previo estudio de las pruebas testimoniales y documentales que se alleguen, la observación y revisión directa del predio y la existencia de los daños, determine los respectivos perjuicios patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) ocasionados al predio por el cercenamiento de la red eléctrica, con ocasión del hecho materia del debate, cuantificando el valor de las indemnizaciones que considere convenientes para resarcir el daño.

#### **CUANTIA, COMPETENCIA y PROCEDIMIENTO:**

La primera la estimo en \$9'500.000,ºº por lo que me refiero a una PRIMERA INSTANCIA.

Por razón de la cuantía, la naturaleza del proceso, la vecindad de las partes, el lugar de ocurrencia de la falla del servicio, la competencia para conocer de este proceso de primera instancia corresponde a ese Juzgado Administrativo.

El trámite a seguirse es un PROCESO ORDINARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de MENOR CUANTIA por acción de REPARACION DIRECTA.

#### **ANEXOS:**

- Los documentos relacionados en el capítulo de pruebas.

**Nota:** No se adjuntan copias para archivo judicial ni traslado, por expresa disposición del Dto. 806 del 2020.

No obstante la anterior nota, simultáneamente se envía copia virtual de la presente demanda y sus anexos al correo electrónico de los demandados.

### **DIRECCIONES para CITACIONES y/o NOTIFICACIONES:**

El suscrito abogado y representante legal de la accionante, recibirá notificaciones en la oficina 03, Edificio Esponsión, carrera 23 N° 25-32 de Manizales, cel. 313 6529408, email: [fenibar@yahoo.es](mailto:fenibar@yahoo.es)

Los demandados:

- **AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p.** (NIT 810.000.598-0), y su representante legal, en la avenida Kevin Angel N° 59-181 de Manizales, tel. 8879770, cel. 311 3399893, email: [notificacionesjudiciales@aguasdemanizales.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@aguasdemanizales.com.co)

- El contratista **HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE**, localizable en la carrera 22 N° 48 C 15 de Manizales, tel. fijo 8850741, cel. 320 7268275, email: [Halberto2001@hotmail.com](mailto:Halberto2001@hotmail.com) (información obtenida en el portal google, en la dirección electrónica: [community.secop.gov.co](http://community.secop.gov.co))

- La Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación: carrera 7 N° 75-66, pisos 2 y 3, de Bogotá D.C., email: [procesosnacionales@defesajuridica.gov.co](mailto:procesosnacionales@defesajuridica.gov.co)

Ruego dar a esta demanda el trámite legal que le corresponda, toda vez que está plenamente ajustada a derecho en todas sus partes.

Como siempre, me suscribo de Usted, con todo el respeto y consideración que se merece,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JF MQ', enclosed within a faint, irregular oval shape.

**JOSE FENIBAR MARIN QUICENO**  
C.C. 10'264.105 de Manizales  
T.P. de abogado 54085 del C.S. de la J.

Señores

**PROCURADURIA JUDICIAL ADMINISTRATIVA –reparto-  
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION  
Manizales**

**Referencia:** MEDIO DE CONTROL: REPARACION DIRECTA  
**Demandante:** INVERSIONES FENI & CIA. S. en C. (NIT 810.002.432-6)  
**Demandados:** AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p. y  
el contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE  
**Asunto:** AGOTAMIENTO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD  
**Objeto:** CONCILIACION PREVIA OBLIGATORIA

**JOSE FENIBAR MARIN QUICENO**, mayor de edad y domiciliado en Manizales, identificado con la C.C. 10'264.105 de Manizales, abogado inscrito y en ejercicio, con T.P. de abogado 54085 del C.S. de la J., con el acostumbrado respeto me dirijo a Ustedes, en mi doble condición de abogado y representante legal de la sociedad **INVERSIONES FENI & CIA. S. en C.** (NIT 810.002.432-6) actual propietaria del inmueble ubicado en la carrera 18 N° 4-45, barrio La Francia, de Manizales, para en su representación iniciar, tramitar y culminar un **PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO** por acción de **REPARACION DIRECTA** (art. 140 nuevo CPACA), y perseguir judicialmente la responsabilidad administrativa, con la consecuente obligación jurídica de reparar patrimonialmente todos los perjuicios materiales y extrapatrimoniales *-ahora denominados “alteración grave de las condiciones de existencia”-* causados por la entidad **AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p.** (NIT 810.000.598-0), *empresa de servicios públicos mixta, constituida por EP 521 del día 28.02.1996, otorgada en la Notaria Segunda de Manizales, inscrita en la Cámara de Comercio de Manizales bajo el registro N° 9-34333 del día 19.03.1996*, con domicilio principal en Manizales, representada legalmente por su gerente general JUAN MARTIN ZULUAGA TOBON, mayor de edad y domiciliado en Manizales, o por quien ejerza similares funciones, y contra el contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, mayor de edad y domiciliado en Manizales.

En consecuencia,, comedidamente solicito personería judicial suficiente para actuar ante ustedes, y en uso de la misma solicito **CONCILIACION PREJUDICIAL OBLIGATORIA**, con base en lo siguiente:

#### **SUJETOS o PARTES PROCESALES:**

Convocante: Sociedad **INVERSIONES FENI & CIA. S. en C.** (NIT 810.002.432-6) actual propietaria del inmueble ubicado en la carrera 18 N° 4-45, barrio La Francia, de Manizales, representada legalmente por su gerente y socio gestor **JOSE FENIBAR MARIN QUICENO**, mayor de edad y domiciliado en Manizales, identificado con la C.C. 10'264.105 de Manizales, abogado inscrito y en ejercicio, con T.P. de abogado 54085 del C.S. de la J.

Convocados:

- a) **AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p.** (NIT 810.000.598-0), empresa de servicios públicos mixta, constituida por EP 521 del día 28.02.1996, otorgada en la Notaria Segunda de Manizales, inscrita en la Cámara de Comercio de Manizales bajo el registro N° 9-34333 del día 19.03.1996, con domicilio principal en Manizales, representada legalmente por su gerente general JUAN MARTIN ZULUAGA TOBON, mayor de edad y domiciliado en Manizales, o por quien ejerza similares funciones, y,
- b) El contratista **HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE** (C.C. 19'106.280), mayor de edad y domiciliado en Manizales.

Sirven a esta conciliación prejudicial, los siguientes fundamentos fácticos:

**HECHOS:**  
**ACCIONES y OMISIONES:**

**PRIMERA:** En el trayecto de la carrera 18, barrio La Francia, sobre los antejardines, recientemente, para el segundo semestre del año 2019, se realizaron obras de “optimización y variación de la red de acueducto, fase II”, que conllevaron perforaciones del terreno aledaño a los inmuebles.

**SEGUNDA:** En el antejardín de nuestra casa, situada en la carrera 18 N° 4-45, barrio La Francia de Manizales, y en espacio público, precisamente donde se hicieron las perforaciones por los funcionarios del contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, o de AGUAS DE MANIZALES, se encuentra un poste que sostiene el medidor de energía eléctrica, y hacia el piso un tubo de conducción de la red eléctrica al interior del inmueble afectado.

**TERCERA:** Para mediados de noviembre del año en curso, el inmueble estuvo sin moradores por lapso de dos semanas, y cuando regresamos, no había energía eléctrica, y todos los víveres de la nevera putrefactos.

**CUARTA:** El servicio no había sido suspendido, sino que, al contratar a un ingeniero eléctrico para que hiciera un diagnóstico o determinará la causa de la ausencia del servicio de energía eléctrica en el inmueble, encontró cercenado tanto el tubo de conducción, como los cables, en la base del poste externo que sostiene el medidor.

**QUINTA:** Inmediatamente se hizo el reclamo a los trabajadores del lugar (*que hacían las obras de variación de redes de acueducto*), que incluso seguían perforando los pisos, y nunca dieron respuesta satisfactoria, ni indicaron quien era el ingeniero residente ni el responsable de la obra. Y tampoco hicieron nada para remediar la situación.

**SEXTA:** Ante tal atropello, acudimos a llamar a la profesional social del contratista, de nombre PAULA JANETH ZULUAGA, con quien se había firmado el acta de vecindad N° 10, informándole lo acontecido, y remediara la situación, y hasta la fecha no se ha obtenido ninguna respuesta seria ni favorable.

**SEPTIMA:** Ante la premura de la situación, debimos contratar un ingeniero eléctrico para que reparara el daño, lo cual se hizo el día 21.11.2019, como lo constatan las fotografías tomadas en situ, y que se anexan.

**OCTAVA:** Ante la anomalía de la situación descrita, que constituye una evidente responsabilidad extracontractual, o falla del servicio, por parte de AGUAS DE MANIZALES, solidariamente con el contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, hemos realizado diversas reclamaciones para que resarzan los perjuicios causados, incluso, informándolo a un funcionario de la interventoría, sin que hasta la fecha hayamos obtenido una respuesta seria ni favorable.

**NOVENA:** Recientemente, a principios del año 2020, sólo hubo una llamada de la señora PAULA JANETH ZULUAGA, a nombre del contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, quien ofreció una suma resarcitoria por valor de \$200.000,00, misma que fue rechazada de plano por pírrica e insuficiente frente a los daños directos y colaterales acaecidos.

**DECIMA:** Existe nexo de causalidad entre el siniestro –*ocurrido a mediados de noviembre del año 2019-*, por la ruptura descuidada de los cables de conducción de energía al interior del inmueble ubicado en la carrera 18 N° 4-45 de Manizales, por cuenta exclusiva de los trabajadores del proyecto “*optimización y variación de red de acueducto La Francia-Fase II*”, y las secuelas o perjuicios sufridos por el ahora reclamante, y una evidente responsabilidad extracontractual endilgada solidariamente a la entidad AGUAS DE MANIZALES S.A., y al contratista de la obra señor HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, por ser la primera la titular de las redes de conducción de acueducto, administradora, operadora, y mantenedora, y/o explotadora económica de las tuberías conductoras de agua en el sitio del hecho, y, el segundo, porque, y especialmente, fue quien causó los daños a la red eléctrica del inmueble situado en la carrera 18 N° 4-45 de Manizales.

**UNDECIMA:** La culpa exclusiva de los hechos referidos, generador de los perjuicios causados al reclamante, la tienen solidariamente AGUAS DE MANIZALES S.A., como dueña y beneficiaria de las obras emprendidas, y el CONTRATISTA señor HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, por la incuria, negligencia, impericia, y violación de los reglamentos de construcción, operación, mantenimiento o conservación de redes y tuberías, conductoras de agua, o en el manejo de la reposición de redes efectuadas en el barrio La Francia, o la impericia en el manejo de los movimientos de tierra por los trabajadores a su cargo, que cercenaron la red eléctrica interna del predio, desde su acometida externa.

**DUODECIMA:** En consecuencia, los perjuicios causados por los responsables a la afectada reclamante, son los siguientes:

### **12.1. PERJUICIOS MATERIALES:**

12.1.1. Por DAÑO EMERGENTE (*lo que sale del patrimonio del perjudicado para atender las consecuencias o efectos del daño*), por reposición de cableado eléctrico y redes, como de víveres perdidos por el corte intempestivo de la energía eléctrica por casi dos semanas, todo lo cual se estima en \$2'000,000,00 (dos millones de pesos moneda colombiana).

12.1.2. Por LUCRO CESANTE (*lo que deja de ingresar al patrimonio económico del perjudicado como consecuencia del daño*), por los graves daños y perjuicios sufridos.

12.1.2.1. CONSOLIDADO se estima en \$3'000,000,00 (tres millones de pesos moneda colombiana), hasta la presente fecha, contados desde la ocurrencia del daño; y,

12.1.2.2. FUTURO se estima en \$500.000,°° mensuales desde la ocurrencia del hecho hasta la fecha en que se indemnicen total y satisfactoriamente los perjuicios causados.

**12.2. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** (*objetivados y subjetivados*): *Es el precio del dolor, que corresponde a la angustia o dolor íntimo que se siente cuando se afectan los sentimientos por la lesión o daño de que se es víctima, ahora denominados “alteración grave de las condiciones de existencia”, según tesis establecida por la jurisprudencia patria:*

*"(...) el daño extrapatrimonial denominado en los fallos mencionados" "daño a la vida de relación", corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquélla, ni siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial -distinto del moral- es consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de relación de quien la sufre.*

*De otra parte, se precisa que una afectación de tal naturaleza puede surgir de diferentes hechos, y no exclusivamente como consecuencia de una lesión corporal. De otra manera, el concepto resultaría limitado y, por lo tanto, insuficiente, dado que ... únicamente permitiría considerar el perjuicio sufrido por la lesión a uno solo de los derechos de la personalidad, la integridad física. Así, aquella afectación puede tener causa en cualquier hecho con virtualidad para provocar una alteración a la vida de relación de las personas, como una acusación calumniosa o injuriosa, la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de éste por otra persona (situaciones a las que alude, expresamente, el artículo 4° del Decreto 1260 de 1970), o un sufrimiento muy intenso (daño moral), que, dada su gravedad, modifique el comportamiento social de quien lo padece, como podría suceder en aquellos casos en que la muerte de un ser querido afecta profundamente la vida familiar y social de una persona. Y no se descarta, por lo demás, la posibilidad de que el perjuicio a la vida de relación provenga de una afectación al patrimonio, como podría ocurrir en aquellos eventos en que la pérdida económica es tan grande que -al margen del perjuicio material que en sí misma implica- produce una alteración importante de las posibilidades vitales de las personas.*

*Debe decirse, además, que este perjuicio extrapatrimonial puede ser sufrido por la víctima directa del daño o por otras personas cercanas a ella, por razones de parentesco o amistad, entre otras.*

*En este sentido, son afortunadas las precisiones efectuadas por esta Sala en sentencia del 2 de octubre de 1997, donde se expresó, en relación con el concepto aludido, que no se trata de indemnizarla tristeza o el dolor experimentado por la víctima - daño moral -, y tampoco de resarcirlas consecuencias patrimoniales que para la víctima siguen por causa de la lesión - daño material -, "sino más bien de compensar, en procura de otorgar al damnificado una indemnización integral... la mengua de las posibilidades de realizar actividades que la víctima bien podría haber realizado o realizar, de no mediar la conducta dañina que se manifestó en su integridad corporal" (Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 11652. Mag. Pon. Daniel Suárez Hernández.)*

Como es al juzgador de instancia a quien le corresponde determinar el valor de los perjuicios extrapatrimoniales —antes morales y psicológicos—, estos deberán ser tasados en

la sentencia respectiva, en caso de tenerse que recurrir a acciones judiciales, lo que, por ahora, se estima en la suma equivalente a veinte salarios mínimos vigentes.

### **12.3. INDEXACION o CORRECCION MONETARIA:**

No obstante lo anterior, considero en mi modesto criterio jurídico, y con apoyo en la normatividad vigente que pregona equidad y justicia, con reparación integral de la víctima, que tales sumas de dinero deben ser actualizadas desde la fecha del siniestro, hasta el pago efectivo de las indemnizaciones.

La indexación se justifica por el envilecimiento de la moneda, fruto de la devaluación, pues su finalidad es permitirle al acreedor obtener la reparación integral, actualizando las cifras que debió obtener por las indemnizaciones pretendidas, para que el valor sea real al momento en que debe recibirlos.

**DECIMOTERCERA:** A pesar de los requerimientos repetidos a los responsables directos: AGUAS DE MANIZALES y CONTRATISTA, a través de sus dependientes, siguiendo el conducto regular, no se ha obtenido respuesta seria ni satisfactoria.

**DECIMOCUARTA:** Incluso, y previamente, se hizo reclamación formal y directa, tendiente a AGOTAR VIA GUBERNATIVA para todos los efectos legales y jurídicos pertinentes, misma que tampoco fue atendida satisfactoriamente, habida cuenta que la operadora de servicios públicos de acueducto descargó la responsabilidad en el contratista, y este no asumió una posición seria de resarcimiento, como se demuestra con los documentos que se adjuntan.

**DECIMOQUINTA:** El art. 90 de la C.P. reza: *"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas"*, y por extensión, por todos los operadores de servicios públicos domiciliarios.

**DECIMOSEXTA:** Ante la anomalía de la situación descrita, que constituye una evidente responsabilidad extracontractual, o falla del servicio, de la infraestructura de acueducto y alcantarillado o su operador y mantenedor, que lo es AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p. y solidariamente el contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, como director de las obras emprendidas, tal circunstancia es sustento de la acción de reparación directa que se emprende, con este su primer paso como requisito de procedibilidad, significándose con lo anterior que ambos –empresa y contratista– son solidariamente responsables de los daños, perjuicios e indemnizaciones a que haya lugar.

**DECIMOSEPTIMA:** La entidad AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p., y el contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, a pesar de ser solidariamente responsables de los daños, NO han resarcido de manera alguna los perjuicios causados al predio de mi mandante, a pesar de las pruebas aportadas, y sólo se limitaron a ofrecer una ínfima suma resarcitoria, que ni siquiera mitiga los perjuicios causados, menos los perjuicios colaterales ocasionados.

**DECIMOCTAVA:** Según lo anterior, AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p., tiene bajo su responsabilidad la administración, explotación económica, operación, mantenimiento, manejo y cuidado de los ductos de conducción de agua potable y redes de alcantarillado, actividades con las cuales se produjo el hecho administrativo ya mencionado, pues no observaron el debido cuidado para evitar accidentes como el que se presentó, y que debió corregir y restablecer el dueño del predio afectado, lo que infiere el mal manejo en el movimiento de tierras, o la impericia de sus funcionarios para

las instalaciones emprendidas de ductos o para corregir el daño.

**DECIMONOVENA:** Existe nexo de causalidad entre el siniestro *-presentado a mediados de noviembre del 2019-*, y las secuelas o perjuicios sufridos por el actor en su propiedad urbana, explícitamente con el daño en la red eléctrica principal de acometida al interior del predio, cuya responsabilidad extracontractual endilgada solidariamente a la entidad AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p. y a su contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE, es injustificable, por ser aquella la titular, propietaria, administradora, operadora, mantenedora, o explotadora económica de las redes de acueducto y alcantarillado local, y el segundo, por ser su dependiente y responsable directo de las obras emprendidas con las cuales se causó el daño.

**VIGESIMA:** La culpa exclusiva de los hechos referidos, generador de los perjuicios causados al actor, la tienen solidariamente la entidad reclamada, y su contratista, por la incuria, negligencia, impericia, y violación de los reglamentos de construcción, operación, mantenimiento o conservación de redes y tuberías, de acueducto y alcantarillado, o en el manejo de los terrenos en que asientan o distribuyen, o la impericia en el manejo de los movimientos de tierra por sus funcionarios.

### **P R E T E N S I O N E S:**

Con base en los anteriores hechos, y en el derecho que adelante invocaré, comedidamente solicito al **CENTRO DE CONCILIACION DE LA PROCURADURIA JUDICIAL ADMINISTRATIVA DE MANIZALES**, elegida como CENTRO DE CONCILIACION PREJUDICIAL, que previos los trámites legales de rigor, se **CONVOQUE** a **AUDIENCIA PREJUDICIAL DE CONCILIACION**, en la que se intenten estos acuerdos:

**PRIMERA:** Acordar la declaratoria de existencia de una obligación indemnizatoria a cargo solidario de la entidad **AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p.** (NIT 810.000.598-0), *empresa de servicios públicos mixta, constituida por EP 521 del día 28.02.1996, otorgada en la Notaria Segunda de Manizales, inscrita en la Cámara de Comercio de Manizales bajo el registro N° 9-34333 del día 19.03.1996*, con domicilio principal en Manizales, representada legalmente por su gerente general JUAN MARTIN ZULUAGA TOBON, mayor de edad y domiciliado en Manizales, o por quien ejerza similares funciones, y, del contratista **HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE** (C.C. 19'106.280), mayor de edad y domiciliado en Manizales, y a favor de la sociedad **INVERSIONES FENI & CIA. S. en C.** (NIT 810.002.432-6) actual propietaria del inmueble ubicado en la carrera 18 N° 4-45, barrio La Francia, de Manizales, que resultara afectado con los daños inferidos por los reclamados.

**SEGUNDA:** Acordar que los convocados **AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p.** (NIT 810.000.598-0), y el contratista **HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE** (C.C. 19'106.280), mayor de edad y domiciliado en Manizales, están en la obligación inmediata y solidaria, o en el plazo que se convenga, a restablecer los derechos conculcados, y pagar los perjuicios causados a la sociedad **INVERSIONES FENI & CIA. S. en C.** (NIT 810.002.432-6) actual propietaria del inmueble ubicado en la carrera 18 N° 4-45, barrio La Francia, de Manizales, que resultara afectado con los daños inferidos por los reclamados, que se estiman en los siguientes rubros:

#### **2.1. PERJUICIOS MATERIALES:**



2.1.1. Por DAÑO EMERGENTE (*lo que sale del patrimonio del perjudicado para atender las consecuencias o efectos del daño*), por reposición de cableado eléctrico y redes, como de víveres perdidos por el corte intempestivo de la energía eléctrica por casi dos semanas, por la suma de \$2'000,000,°° (dos millones de pesos moneda colombiana).

2.1.2. Por LUCRO CESANTE (*lo que deja de ingresar al patrimonio económico del perjudicado como consecuencia del daño*), por los graves daños y perjuicios sufridos.

2.1.2.1. CONSOLIDADO, por la suma de \$3'000,000,°° (tres millones de pesos moneda colombiana), hasta la presente fecha, contados desde la ocurrencia del daño; y,

2.1.2.2. FUTURO, por la suma de \$500.000,°° mensuales desde la ocurrencia del hecho hasta la fecha en que se indemnicen total y satisfactoriamente los perjuicios causados.

**2.2. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** (*objetivados y subjetivados*): *Es el precio del dolor, que corresponde a la angustia o dolor íntimo que se siente cuando se afectan los sentimientos por la lesión o daño de que se es víctima*, ahora denominados “*alteración grave de las condiciones de existencia*”, según tesis establecida por la jurisprudencia patria, por la suma equivalente a veinte salarios mínimos mensuales vigentes.

**2.3. INDEXACION o CORRECCION MONETARIA**, por las sumas de dinero anteriores, que deben ser actualizadas desde la fecha del siniestro, hasta el pago efectivo de las indemnizaciones, lo que se justifica por el envilecimiento de la moneda, fruto de la devaluación, pues su finalidad es permitirle al acreedor obtener la reparación integral, actualizando las cifras que debió obtener por las indemnizaciones pretendidas, para que el valor sea real al momento en que debe recibirlos.

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO y COMPETENCIA:**

La presente petición se fundamenta en la Ley 142 de 1994, Ley 1437 del 2011 o nuevo CPACA., Ley 446 de 1999, y en las demás normas vigentes y concordantes.

Son ustedes señores Procuraduría Judicial Administrativa –*reparto*- de Manizales, competentes para conocer de éste trámite de conformidad a lo prescrito en el nuevo CPACA (Ley 1437 del 2011), Dtos. 171 y 173 de 1993, y Ley 1285 del 2009.

## **RELACION DE MEDIOS PROBATORIOS:**

Comendidamente solicito se sirva tener como pruebas los siguientes documentos (30 folios útiles) que se allegan con esta petición de conciliación:

- Certificado de existencia y representación legal de la entidad afectada.
- Copia del derecho de petición, y respuesta de AGUAS DE MANIZALES S.A., con agotamiento de vía gubernativa.
- Copia de similar respuesta del apoderado del contratista HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE.
- Copias de placas fotográficas tomadas al sitio del daño y reparación de daños.

- Copia del acta de vecindad, para emprender obras.
- Certificado de reparación de daños directos (red eléctrica).

### **ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA:**

La estimamos en la suma de \$10'000,000,00 moneda colombiana, que es aproximadamente el valor actualizado de las pretensiones (*daño emergente y lucro cesante*), en razón a los costos de reparación de las red eléctrica destruida por los funcionarios de los reclamados, el corte intempestivo del suministro de energía eléctrica al inmueble por una semana aproximadamente, más los daños colaterales por pérdida de víveres ante el mismo corte eléctrico, y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, desde la ocurrencia del siniestro en noviembre del 2019, y aún en la actualidad, luego de transcurridos ocho meses, y hasta que se restablezcan los derechos conculcados.

### **JURAMENTO:**

En nombre del suscrito, y de mi mandante, expresamente manifestamos que ni antes ni simultáneamente, hemos presentado reclamación similar ante ninguna autoridad administrativa o judicial, por los mismos hechos o pretensiones invocados en el libelo introductor de la conciliación que se analiza, ni hemos obtenido resarcimiento ni pago alguno por causa similar, manifestaciones que hacemos bajo la gravedad de juramento.

Las reclamaciones que anteriormente se hayan presentado, fueron a título de derecho de petición, que resultó fallido, y se constituyó para agotamiento de la vía gubernativa.

### **ANEXOS:**

- Los documentos enunciados como prueba documental, aportadas en el acápite respectivo del acervo probatorio.

### **Notas:**

- No se adjuntan copias de esta solicitud, ni de sus anexos, para los traslados a los convocados, como a la Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación, por expresa disposición del Dto. Legislativo 806 del 2020.
- Simultáneamente se envía por correo electrónico de los convocados, la remisión de la presente solicitud, con sus anexos.

### **DIRECCIONES para NOTIFICACIONES y/o CITACIONES:**

El suscrito abogado y la entidad afectada: en la of. 03, primer piso, Edificio La Esponsión, carrera 23 N° 25-32, de Manizales, cel. 313 6529408, email: fenibar@yahoo.es

Los convocados y sus representantes legales:

- **AGUAS DE MANIZALES S.A. e.s.p.** (NIT 810.000.598-0), y su representante legal, en la avenida Kevin Angel N° 59-181 de Manizales, tel. 8879770, cel. 311 3399893, email: *notificacionesjudiciales@aguasdemanizales.com.co*
- El contratista **HUGO ALBERTO ARIAS DUQUE**, localizable en la carrera 22 N° 48 C 15 de Manizales, tel. fijo 8850741, cel. 320 7268275, email:

*Halberto2001@hotmail.com (información obtenida en el portal google, en la dirección electrónica: [community.secop.gov.co](mailto:community.secop.gov.co))*

- La Agencia para la Defensa Jurídica de la Nación: calle 70 N° 4-60 de Bogotá D.C., correo electrónico [www.defensajuridica.gov.co](http://www.defensajuridica.gov.co)

Comedidamente solicito dar a la presente solicitud el trámite legal que le corresponda, ya que se ajusta plenamente a derecho en todas sus partes.

Como siempre, me suscribo de Ustedes, con todo respeto y consideración,

**JOSE FENIBAR MARIN QUICENO**

C.C. 10'264.105 de Manizales

T.P. de abogado 54085 del C.S. de la J.

Cel. 313 6529408

Email: [fenibar@yahoo.es](mailto:fenibar@yahoo.es)